

# LA GESTIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS: EL CASO DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA

Javier Verdugo Santos, Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

ESTE ARTÍCULO PRETENDE REFLEXIONAR SOBRE LA GESTIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y LOS NUEVOS RETOS QUE LA INCORPORACIÓN DE CONCEPTOS COMO TERRITORIO Y PAISAJE EN LA TÉCNICA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCEN EN LA APLICACIÓN DE LAS FIGURAS O MODELOS DE GESTIÓN EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN TANTO NACIONAL COMO AUTONÓMICA EN ESPAÑA EN GENERAL Y ANDALUCÍA EN PARTICULAR. ANALIZANDO ASIMISMO LOS INTENTOS QUE PARA SUPERAR ESAS LIMITACIONES SE ESTÁN LLEVANDO A CABO: PARQUES ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES, ASÍ COMO LA NUEVA REGULACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. FINALMENTE SE ESTABLECE UNA HIPÓTESIS DE TRABAJO PARA EL ESPACIO CULTURAL DONDE SE UBICAN LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA.

## THE MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES: A CASE STUDY OF THE ANTEQUERA DOLMENS

THIS ARTICLE CONTEMPLATES THE MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES AND THE NEW CHALLENGES POSED BY THE INCORPORATION OF CONCEPTS SUCH AS TERRITORY AND SCENERY IN THE WAY NATIONAL HERITAGE IS CONSERVED. IT EXPLORES THE ISSUES IN APPLYING EXISTING MANAGEMENT MODELS AND LEGAL CONCEPTS IN NATIONAL AND AUTONOMIC LEGISLATION IN SPAIN IN GENERAL AND ANDALUSIA IN PARTICULAR. SEVERAL EFFORTS UNDERWAY TO OVERCOME CONSTRAINTS ARE ANALYSED SUCH AS ARCHAEOLOGICAL AND CULTURAL PARKS, AND THE NEW REGULATIONS PROPOSED IN THE ANDALUSIAN NATIONAL HERITAGE LAW. FINALLY, IT ESTABLISHES A WORKING HYPOTHESIS FOR THE CULTURAL SPACE IN WHICH THE ANTEQUERA DOLMENS ARE LOCATED.

## Introducción

La gestión siempre va precedida de la protección, aunque la primera inquietud fue el simple interés. En la evolución de ese interés por el pasado es la pesquisa o la rebusca de objetos la primera de las intenciones desde que Teodorico (BRACCO, 1979) permitió que pudieran aprovecharse los restos de los sepulcros sin dueños. Paralelamente a este aprovechamiento y uso de los restos de la antigüedad como *spolia*, surge también un interés por ciertas piezas, especialmente la numismática, las gemas y las esculturas, así como la epigrafía. Se utilizan ciertos objetos como prestigio político –Renacimiento carolingio–, o para justificar el poder temporal de los papas. Con ello se produce la entrada en la historia de los anticuarios. Pero durante toda la Edad Moderna los poderes públicos sólo se interesan por proteger los hallazgos de piezas, es decir del patrimonio mueble. La creación de los Museos Vaticanos en el Patio del Belvedere, primer paradigma de sistematización de una colección arqueológica tras la Antigüedad, se completa con el de los Conservadores tras las donaciones de Sixto IV, que superan la fase medieval de las *wunderkammern*. Los descubrimientos de Pompeya y Herculano fijarán el punto de inflexión. El reino de Nápoles ordenará la realización de las primeras campañas sistemáticas de la historia, y se comienzan a plantear qué hacer con aquel inmenso campo de ruinas; en Roma los papas comienzan a interesarse por el Foro y su área arqueológica y se originan proyectos de embellecimiento e intervenciones, que se extienden a los restos de la ciudad de Ostia, la Pompeya vaticana. Los Comisarios de Antigüedades del Estado Pontificio, cargo que se remonta a León X, desarrollan una incipiente organización de la tutela de Roma y sus territorios, y se comienzan a realizar excavaciones, controlar los movimientos de tierras y el cuidado y mantenimiento de ciertas áreas. Pero el gran cambio se produce con la Ilustración y la Revolución Francesa. La expedición de Bonaparte a Egipto con sus sabios y la incorporación de las ruinas egipcias al imaginario europeo y el desciframiento de los jeroglíficos supone un mayor interés aún por la antigüedad y sus restos que el que había desarrollado la necesidad para todo caballero de hacer el *grand tour* a Roma (BILLI, 1997). La guerra

de Italia lleva a Roma a los franceses quienes, además de aprovechar la coyuntura para expoliar por el Tratado de Tolentino al Vaticano de grandes piezas como el Laoconte para el Louvre (el gran museo de la Nueva Roma que es París), desarrollan un vasto programa de sistematizaciones arqueológicas en el Foro (BARATTE, 1985). Esto será el detonante que despertará la conciencia italiana por su patrimonio. Tras la salida de los franceses, el papado dictará el Decreto Pacca, y arqueólogos pontificios como Carlos Fea (RIDLEY, 2000) sistematizarán la organización y gestión de las áreas arqueológicas del Foro de Roma y de Ostia. Después, el Estado italiano, basándose en este precedente legislativo, desarrollará la figura de la *soprintendenza* (ALIBRANDI, 1985), que organizará los sitios arqueológicos. Surge así la arqueología nacional y los estados comienzan a desarrollar un modelo de protección y gestión de su patrimonio.

## La gestión de los sitios arqueológicos en España hasta la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985

En España la evolución del sistema no es diferente, sino más bien una imitación de los cuerpos legislativos italianos y franceses. Es cierto, que España tiene su Pompeya: Itálica. Entre 1781-1788, Francisco de Bruna lleva a cabo excavaciones en Santiponce y saca a la luz importantes restos arqueológicos, que servirán, posteriormente, como base del Museo Arqueológico de Sevilla; pero salvo el impulso de la reina Isabel II, tras el fallido de José I Bonaparte, Itálica no logra tener un fuerte lanzamiento hasta la segunda mitad del siglo XX. Ni la Exposición Universal de 1929 ni la II República con su programa de rescate, malogrado por la guerra civil, lograron que Itálica alcanzase cotas importantes de investigación y por supuesto de gestión.

Del análisis de la legislación española de protección se deduce que el interés de los poderes públicos hasta 1985 no fue otro que el de proteger aisladamente, sin tener en cuenta su contexto, tanto las zonas arqueológicas como los edificios monumentales. Prima la idea de lo singular sin apreciar otros aspectos espaciales o territo-



001. Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería /  
Imagen: Juan Carlos Cazalla, IAPH

002. Alcazaba del Conjunto Monumental de la Alhambra  
(Granada) / Imagen: Juan Carlos Cazalla, IAPH

003. Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra (Córdoba) /  
Imagen: Juan Carlos Cazalla, IAPH

004. Conjunto Arqueológico Itálica (Santiponce, Sevilla) /  
Imagen: Juan Carlos Cazalla, IAPH

005. Necrópolis del Conjunto Arqueológico de Carmona  
(Sevilla)/ Imagen: Beatriz Sanjuán Ballano

006. Conjunto Arqueológico Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) /  
Imagen: Silvia Fernández Cacho



riales. Sin embargo, vemos algunas referencias paisajísticas como los “sitios pintorescos”<sup>1</sup> o el “paraje pintoresco”<sup>2</sup>, concepto éste aportado por el Romanticismo con una enorme carga subjetiva y de difícil interpretación. Finalmente se recogerá en la Ley de 12 de mayo de 1956 “la protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional o las bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que conviniere al fomento del turismo o predios rústicos de pintoresca situación”. Esta protección se preveía a través de planes especiales urbanísticos. La primera conclusión es que la protección de los sitios arqueológicos se realizaba a través de su declaración como Monumento<sup>3</sup>. Tal es el caso de Itálica, Ampurias, Numancia, Teatro de Mérida o Teatro de Sagunto por citar quizás los de mayor relieve. Estos sitios arqueológicos que eran declarados Monumentos apenas poseían una estructura de gestión, basada la mayoría de las veces en la institución del “guarda o conserje de monumento”<sup>4</sup> y su encomienda a las comisiones de monumentos-institución surgida para sistematizar las obras de arte de los monumentos desamortizados-, o a las diputaciones arqueológicas, y a los entes locales más cercanos, diputaciones provinciales principalmente, que tenían la obligación de dotar presupuestariamente a las comisiones de monumentos<sup>5</sup>. Este papel de las diputaciones en la prestación de “ayuda económica, para la conservación y consolidación de los monumentos enclavados en su territorio”<sup>6</sup>, poco estudiado hasta el momento, fue crucial en la gestión de áreas arqueológicas, como en el caso de Ampurias, propiedad de la Diputación de Barcelona hasta su reciente incorporación al Museo de Arqueología de Cataluña, o Itálica, en cuya gestión participó la Diputación Provincial de Sevilla en colaboración con la comisión de monumentos y con los ministerios de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Cultura, desde 1863 hasta 1985. Este modelo de gestión basado en el simple mantenimiento completado con algunos proyectos de conservación o de investigación, y en la apertura al público de ciertas áreas, ha sido y es aún en gran medida el predominante en los sitios arqueológicos españoles.

En cuanto a la creación de figuras de gestión hemos de decir que la única que la legislación anterior a 1985 reconoce es la del

museo<sup>7</sup>, sin que aparezca ninguna otra referencia a la gestión salvo lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de 16 de abril de 1936, que encomienda a la Junta Superior del Tesoro Artístico y a las corporaciones y funcionarios que de ella dependan “la vigilancia y reparación de los monumentos (...) así como la organización y desarrollo de los servicios para atenderlos...”. Esta idea de la organización será el embrión de la incipiente gestión de los sitios arqueológicos. En ellos jugarán un papel fundamental la figura de los arquitectos conservadores que, en número de 6 para toda España, creó el Reglamento de 16 de abril de 1936 en su artículo 37, con la misión de vigilar, redactar y dirigir proyectos de conservación en los monumentos y por extensión en los sitios arqueológicos que gozaran de tal nivel de protección. Estos arquitectos estaban asistidos por otros 6 arquitectos ayudantes. En total 12 “apóstoles” de la conservación que junto a los guardas y conserjes, quienes tenían las funciones de “guardia, vigilancia y limpieza”<sup>8</sup>, aseguraban el mantenimiento ordinario de los sitios, en especial aquellos abiertos al público. Este fue el sistema de gestión imperante en España desde 1933 a 1985.

De excepcional tenemos que considerar, sin embargo, la etapa de investigación y adquisición de Itálica, llevada a cabo por determinados impulsos políticos entre 1965-1975. Esta etapa se caracterizó por un conjunto de actuaciones sobre el patrimonio histórico andaluz, como la creación de museos o las declaraciones de utilidad pública de numerosos yacimientos como el famoso Decreto del Reino de Tartessos<sup>9</sup>, que coincide con el desempeño de la Dirección General de Bellas Artes por el andaluz Florentino Pérez Embid. En esta etapa se recurre en el ámbito de la gestión a la institución del Patronato: “el decidido interés que el Estado y la sociedad manifiestan hoy por la conservación y el acrecentamiento del patrimonio arqueológico nacional ha determinado el nacimiento de diversos patronatos”<sup>10</sup>. Estos patronatos se forman como consejos en el que participan representantes de instituciones públicas y privadas que tienen por objeto ejercer la función asesora y de cuidado para que la institución cumpla sus fines. Por cercanía geográfica debemos detenernos a analizar el modelo de gestión que cronológicamente

<sup>1</sup> Artículo 8 del Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926.

<sup>2</sup> Artículo 3 de la Ley de 13 de mayo de 1933.

<sup>3</sup> Artículo 3 del Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 y artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de 1933.

<sup>4</sup> Real Decreto de 24 de noviembre de 1924.

<sup>5</sup> Artículo 17 del Real Decreto de 11 de agosto de 1918.

<sup>6</sup> Artículo 25 de la Ley de 13 de mayo de 1933.

<sup>7</sup> Artículos 55 al 65 de la Ley de 13 de mayo de 1933.

<sup>8</sup> Artículo 44 del Reglamento de 16 de abril de 1936.

<sup>9</sup> Decreto 3363/1973, de 21 de diciembre, BOE de 16 de enero de 1974.

<sup>10</sup> Decreto 3429/1969, de 19 de diciembre, BOE de 19 de enero de 1970.

te es el primero que se desarrolla en Andalucía; nos referimos al del Patronato de Itálica, creado por Decreto 1345/1970, de 23 de abril<sup>11</sup>. Dicho patronato no poseía personalidad jurídica propia, al regularse su creación por decreto y no por ley. A partir de 1979, con las corporaciones locales democráticas, la Diputación Provincial de Sevilla, conocedora de las dificultades que entrañaba acometer una acción decidida en el sitio arqueológico sin dotar al Patronato de la necesaria personalidad jurídica, impulsando la gestión bajo los principios de descentralización, coordinación con otros organismos y la utilización de la técnica de la planificación, propuso la constitución de un Consorcio de los previstos, en aquel entonces, en el Real Decreto 3046/77, de 6 de octubre<sup>12</sup>, solución que no fue satisfactoria para el Ministerio de Cultura (VERDUGO, 1983). Esta fórmula de gestión fue usada años más tarde por la Junta de Extremadura, con el Consorcio de Mérida y por la Comunidad Balear con el Consorcio de Pollentia, perdiéndose de este modo la oportunidad de haber contado Itálica y Andalucía con un consorcio desde 1979. La solución fue la del convenio de colaboración entre las instituciones, que trajo como consecuencia la modificación de la composición del Patronato de Itálica por Decreto 3060/1979<sup>13</sup> y Real Decreto 2997/1980, de 21 de noviembre<sup>14</sup>, que produjo como primera consecuencia la de llamar a las antiguas ruinas de Itálica Conjunto Arqueológico de Itálica, denominación que fue luego utilizada en la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía<sup>15</sup> para denominar a este tipo de instituciones del patrimonio histórico.

### El nuevo marco de la gestión tras la Ley 16/1985 y la descentralización autonómica

A partir de la promulgación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español<sup>16</sup>, y de la asunción de competencias por las comunidades autónomas en esta materia, se produjo un cambio sustancial en la gestión de sitios arqueológicos y un debate sobre los límites, el contenido y función del patrimonio en el territorio. Lo más destacable es la ausencia de referencia alguna en la Ley

16/1985 a la gestión de espacios patrimoniales. Ello produjo una interesante discusión sobre la gestión de sitios arqueológicos y patrimoniales, ante la falta de regulación legal y ante la necesidad social de acometer la puesta en valor de grandes áreas patrimoniales. Como consecuencia de dicho debate, tres experiencias destacan en el mapa peninsular: los Parques Arqueológicos, los Conjuntos Arqueológicos y Monumentales andaluces y los Parques Culturales de Aragón.

#### Los Parques Arqueológicos

Constituye uno de los primeros ensayos en orden a la gestión de un espacio territorial. En 1986 el Ministerio de Cultura incluyó en su programación un Plan Nacional de Parques Arqueológicos, confeccionado por el ICROA (Instituto Central de Restauración y Conservación de Obras de Arte). El primer objetivo era claramente la puesta en valor de yacimientos arqueológicos, que fuesen de gran interés y estuvieran en buen estado de conservación, para sobre ellos establecer una estrategia de comunicación social y difusión (QUEROL, 1993:11). No era una categoría de protección, de hecho era condición indispensable que el yacimiento estuviese declarado Bien de Interés Cultural. Se trataba además de yacimientos con un buen estado de conservación que posibilitase su exposición pública, que contasen con infraestructura apropiada para su visita pública y que poseyesen una interacción entre yacimiento y entorno natural o paisajístico. Se trata de una figura de gestión y revalorización de aquellos recursos patrimoniales arqueológicos de base territorial, que posean o puedan restituir un entorno medioambiental originario, y que en ellos “supone que la preservación del medioambiente es tan esencial como la del propio yacimiento” (ALMAGRO, 1993: 134). Los parques procuran integrar otros elementos, no arqueológicos, pero que poseen tanto valor como la propia zona arqueológica. Al final no se trata tanto de un parque arqueológico como de un parque entendido como “un sistema patrimonial más amplio que un mero yacimiento arqueológico” (CABALLERO, 1993: 47). Por consiguiente un parque arqueológico puede ser la suma de varias categorías de protección, englobadas bajo ese modelo de ges-

<sup>11</sup> BOE de 12 de mayo de 1970.

<sup>12</sup> BOE de 26 de noviembre de 1977.

<sup>13</sup> BOE de 22 de enero de 1980.

<sup>14</sup> BOE de 24 de enero de 1980.

<sup>15</sup> BOJA de 13 de julio de 1991 y BOE de 16 de julio de 1991.

<sup>16</sup> BOE de 29 de junio de 1985.



<sup>17</sup> Exposición de motivos de la Ley 1/1991.

<sup>18</sup> Artículo 29, de la Ley 9/1985, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1986 (BOJA, 31 de diciembre de 1985) y Decreto 59/1986, de 19 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos del Patronato de la Alhambra y Generalife BOJA, 10 de abril de 1986.

<sup>19</sup> Decreto 126/1989, de 6 de junio, BOJA, 15 de julio de 1989.

<sup>20</sup> Decreto 128/1989, de 6 de junio, BOJA de 15 de julio de 1989.

<sup>21</sup> Decreto 127/1989, de 6 de junio, BOJA de 3 de noviembre de 1989.

<sup>22</sup> Decreto 146/1992, de 4 de agosto, BOJA de 12 de noviembre de 1992.

<sup>23</sup> Decreto 129/1989, de 6 de junio, BOJA de 3 de noviembre de 1989.

007. La ciudad y la Peña / Imagen: Gerónimo Villena.  
Fuente: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

ción. En su seno pueden existir distintos recursos patrimoniales identificados, que estarán protegidos por categorías diversas, desde una zona arqueológica a un monumento aislado. La evolución de este modelo de gestión de Zonas Patrimoniales diacrónicas, pero centrada fundamentalmente en el valor arqueológico de la misma, ha sido desigual. Los parques arqueológicos han alcanzado un notable desarrollo en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla la Mancha.

### Los Conjuntos Arqueológicos y Monumentales de Andalucía

La Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía desarrolló como instituciones del patrimonio histórico los Conjuntos Arqueológicos y Monumentales, “con el fin de facilitar la administración y custodia de inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz o agrupaciones de los mismos”. Figura de gestión que la Junta de Andalucía había ensayado previamente, tras la experiencia de Itálica, y que la ley se encargó de recono-

cer: “en materia institucional se ha considerado necesario introducir una figura nueva surgida de la propia práctica administrativa (...) los Conjuntos Monumentales o Arqueológicos”<sup>17</sup>. En la década de los ochenta se habían creado los Conjuntos Monumentales de la Alhambra y Generalife<sup>18</sup>, el de Medina Al-Zahra<sup>19</sup> y Alcazaba de Almería<sup>20</sup>, así como los arqueológicos de Itálica<sup>21</sup>, Necrópolis de Carmona<sup>22</sup> y Baelo Claudia<sup>23</sup>, estructurados como unidades administrativas, dotadas de una estructura de gestión y de un plan de actuación. Su desarrollo fue desigual. La Alhambra, con un potente órgano de gestión bajo la forma de organismo autónomo, fue capaz de desarrollar un amplio programa museográfico e interpretativo del conjunto, dotándose además de unos instrumentos de planificación, Plan Director y Plan Especial de la Alhambra, que han permitido que hoy sea una de las áreas patrimoniales más visitadas de España. El resto de los conjuntos, convertidos en meras unidades administrativas sin autonomía y sin planes directores, no han logrado, hasta ahora, un desarrollo efectivo de sus potencialidades



007



008



009



010



011



012



013

008-13. Túmulos de los dólmenes de Menga y Viera con catas arqueológicas (2006, 2007) / Imágenes: Ikarum.  
Fuente: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

(VERDUGO Y PALMA, 2003: 61-96), que podrían convertirse en verdaderos focos de desarrollo, y que necesitan estructuras de gestión estables. La creación de los conjuntos no respondió a una estrategia territorial. Se declararon sólo aquellos, de propiedad pública, que integrados por monumentos o áreas arqueológicas, fueron transferidos del Estado a la Junta de Andalucía, y que se habían consolidado como áreas visitables, primando por encima de todo lo divulgativo y lo turístico, y escasamente la investigación y la conservación. Tampoco parecía responder a una estrategia territorial la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos, dependiente de la Consejería de Cultura, que englobaba a una serie de yacimientos arqueológicos abiertos al público, dotándolos de servicios básicos, favoreciendo su conservación y acceso público. En la actualidad están abiertos entre otros los yacimientos de Cercadilla (Córdoba), Carteia (San Roque, Cádiz), Los Millares (Almería), Castellón Alto (Galera, Granada), Accinipo (Ronda, Málaga) y Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz).

### Los Parques Culturales de Aragón

En Aragón, ha surgido una nueva categoría de áreas patrimoniales: los Parques Culturales. La génesis partió de una reunión de arte rupestre celebrada en 1987 (ROYO GUILLÉN, 2002: 46) en Albarracín. A partir de las conclusiones de esa reunión y del trabajo de especialistas y de la propia administración cultural de Aragón se llevó a cabo una interesante y novedosa experiencia en el ámbito de la protección y gestión del patrimonio. Los Parques Culturales pretenden, como afirma Royo (2002: 46-47), “la integración de elementos culturales tan diversos y complementarios como el arte rupestre y la arqueología, la arquitectura popular y monumental, los modos de vida y la agricultura tradicionales, o el artesanado, junto con el paisaje, la geología, los ríos o la fauna”. De este modo el Parque Cultural permite realizar una labor integradora del mosaico diacrónico del territorio con los elementos naturales y ambientales, propiciando no sólo la protección y puesta en valor del patrimonio histórico, sino su articulación en un modelo de desarrollo sostenible. Con el Parque Cul-

tural se avanza en la idea expresada por L. CABALLERO (1993:47) de un “sistema patrimonial más amplio que un mero yacimiento arqueológico”, una Zona Patrimonial diacrónica que constituye un “sistema científico”. En Aragón se han creado cuatro parques: los del río Vero y Albarracín, a comienzos de los años noventa, y posteriormente los del Maestrazgo y río Martín, a finales de 1994. La figura se halla regulada por la Ley 12/1997 de 3 de diciembre de las Cortes de Aragón<sup>24</sup> y su desarrollo ha permitido una forma de protección y gestión diferentes. Estos parques son además considerados por la ley como “un medio eficaz para el desarrollo sostenible en el ámbito rural aragonés”. Se regula pues el concepto y objetivos de esta figura y además se aprovecha la oportunidad para proponer “una protección integral del patrimonio, coordinada con actividades y usos de suelo previstos en la legislación urbanística, en la ordenación territorial y en las normas medioambientales y turísticas”. El parque es compatible como figura de protección con la existencia de bienes de interés cultural en su seno, declarados con anterioridad. El artículo 1 de la Ley 12/1997 define al Parque Cultural como “un territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico, que gozará de promoción y protección global en su conjunto, con especiales medidas de protección para dichos elementos relevantes”. Esa doble característica de territorio y espacio singular convierte a los Parques Culturales en una categoría idónea para la protección y gestión de una Zona Patrimonial.

De especial importancia es el denominado Plan del parque<sup>25</sup>, que “priorizando la protección del patrimonio cultural, procura la coordinación de los instrumentos de la planificación urbanística, ambiental, turística y territorial”. Este instrumento de planificación, que nace con un sentido totalizador del territorio, es de obligado cumplimiento para los municipios, los particulares y las restantes administraciones públicas<sup>26</sup>. Entre los objetivos del plan<sup>27</sup> merece destacarse que, además de definir el estado de conservación de los elementos patrimoniales que en el mismo se integran, establece los regímenes de protección que procedan y no cuentan con otro tipo de protección sectorial. Es de-

<sup>24</sup> Boletín Oficial de Aragón de 12 de diciembre de 1997.

<sup>25</sup> Artículo 11 de la Ley 12/1997.

<sup>26</sup> Artículo 12 de la Ley 12/1997.

<sup>27</sup> Artículo 13 de la Ley 12/1997.



cir, el plan protegerá aquellos elementos patrimoniales que en el momento de su aprobación carezcan de protección sectorial, y además compatibiliza la existencia de otras protecciones con la del propio parque. De este modo en su ámbito, como ya apuntábamos, pueden cohabitar distintas categorías de protección anteriores o incluso posteriores a la creación del parque. El plan es además un instrumento de actuación que promueve “medidas de conservación, restauración, mejora y rehabilitación de los elementos del patrimonio cultural que lo precisen”. Estas actuaciones se complementan con otras de fomento de la acción cultural, de promoción del turismo cultural y rural y en general de actividad económica en términos de desarrollo sostenible<sup>28</sup>. De gran interés para la protección de los elementos patrimoniales de cada parque es la obligación de incluir en cada plan<sup>29</sup> el “listado de los bienes de interés cultural declarados, incoados u otros susceptibles de declarar en el interior del Parque”, así como un “catálogo del patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnológico o paleontológico” y una “copia o resumen de los instrumentos de planeamiento urbanísticos de los municipios afectados”.

## Nuevos principios para la gestión de los espacios patrimoniales

### El territorio como espacio patrimonial

Los primeros esfuerzos por considerar el territorio como espacio patrimonial han venido de la mano de la arqueología. La investigación arqueológica no podía prescindir del estudio del medio en que ha vivido el hombre, lo que dio lugar a la arqueología ambiental (FRANCOVICH, 2001: 3), que trata de poner en evidencia la interdependencia entre las variables culturales y medioambientales. La reconstrucción del paisaje (CRIADO BOADO, 1999) en la Prehistoria y en la Antigüedad y los estudios geomorfológicos han sido fundamentales para comprender las razones ecológicas y productivas que se encuentran en la elección por parte de una población de un asentamiento. Todo ello ha

llevado a la necesidad de reconstruir el paisaje desde un punto de vista diacrónico, conociendo el espacio y el territorio hasta comprender la evolución antrópica de la zona que pretendemos investigar y tutelar. Partiendo de este conocimiento, en el que no sólo debe incluirse la actividad antrópica sino también la paleontológica y ambiental, podemos llegar a plantear una propuesta de protección basada en el encaje de los estudios diacrónicos en una secuencia general, lo que hemos venido en considerar Zonas Patrimoniales diacrónicas (VERDUGO, 2005). Esta nueva concepción hace que el patrimonio sea un recurso como lo es el patrimonio natural; un factor de riqueza y de desarrollo, a la vez que también posee un valor social, al ser un testimonio de la identidad cultural y de la evolución histórica de una determinada civilización.

### La nueva Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía

En la antigua Ley 1/1991, del Patrimonio Histórico de Andalucía, tan sólo existía una categoría de protección que no de gestión capaz de responder a las expectativas de amplias Zonas Patrimoniales diacrónicas; nos referimos al Sitio Histórico, definido como “el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etiológico, paleontológico o antropológico”. De hecho fue utilizada para cubrir el vacío legal cuando se pretendían proteger grandes áreas, como es el caso del Sitio Histórico de Riotinto, entre otros. En la elaboración de la nueva Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en cuya ponencia redactora participamos, se debatió ampliamente acerca de la conveniencia de contar con una categoría de protección para áreas patrimoniales diacrónicas y de carácter territorial, así como el diseño de una figura de gestión que pudiera administrar estos espacios patrimoniales. La solución fue, de un lado, la inclusión junto a las categorías ya existentes en la Ley 1/91 de una nueva denominada Zona Patrimonial, que viene definida en la ley como “aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y com-

<sup>28</sup> Artículo 13 d) y e) de la Ley 12/1997.

<sup>29</sup> Artículo 15.2 de la Ley 12/1997.

014-017. Vistas aéreas del recinto del Conjunto Arqueológico con imágenes del edificio sede, centro de recepción de visitantes, plaza de El Caminante y Centro Solar Michael Hoskin / Imágenes: Ikarum. Fuente: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera







018. Vista del recinto de El Romeral y la Peña / Imagen: Ikarum. Fuente: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

plementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales”. En el preámbulo del nuevo marco jurídico se justifica esta nueva categoría en función de la “fuerte relación del patrimonio con el territorio” y de sus influencias recíprocas, lo que se hace más presente en las Zonas Patrimoniales, donde el territorio articula un sistema patrimonial integrado, en el que coexisten bienes de distinta naturaleza y cronología, unidos indisolublemente a los valores paisajísticos y ambientales existentes. Por otro lado, la ley incluye entre las instituciones del patrimonio histórico los denominados Espacios Culturales, que se definen como “aquellos inmuebles de titularidad pública o privada inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o agrupaciones de los mismos, que por su relevancia o significado en el territorio donde se emplazan se acuerde su puesta en valor y difusión al público”. Es decir, la nueva ley contempla una amplia figura de gestión del patrimonio, junto con los museos, las bibliotecas y los archivos. Estos Espacios Culturales se clasifican en Conjuntos y Parques Culturales. De este modo la nueva ley consolida los conjuntos ya contemplados en la Ley 1/91, añadiéndoles la obligación de dotarse de un Plan Director y de un órgano de gestión propio y, a su vez, aprovechando la experiencia aragonesa, incorpora los Parques Culturales que se definen como aquellos “Espacios Culturales que abarcan la totalidad de una o más Zonas Patrimoniales que por su importancia cultural requieran la constitución de un órgano de gestión en el que participen las administraciones y sectores implicados”. Dos condiciones se imponen; la primera, la existencia de una o más Zonas Patrimoniales, y la segunda, su importancia cultural. En cuanto a su estructura y órgano de gestión, vienen establecidas en su norma de creación pudiendo adoptar cualquiera de las formas con o sin personalidad jurídica prevista en la legislación. Podemos tener, por tanto, Parques Culturales que funcionen a través de una fundación, un organismo autónomo, una oficina técnica o uno de los consorcios interadministrativos, previstos tanto en la antigua Ley 1/91 como en la actual Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Es-

tos consorcios son los utilizados por Mérida y Pollentia, a los que ya nos hemos referido.

De gran interés es la solución que la nueva Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía prevé cuando se produce la coincidencia entre Parques Culturales y otras figuras. En este caso “se podrán buscar formas de colaboración para la integración de los órganos de gestión y consultivos o de participación social de ambos, de acuerdo con el régimen jurídico de protección, ordenación y gestión de cada uno de ellos”. Finalmente debemos referirnos a la creación en la nueva ley de la Red de Espacios Culturales de Andalucía constituida por un “sistema integrado y unitario formado por aquellos Espacios Culturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma que sean incluidos en la misma por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, así como aquellos enclaves abiertos al público que por sus condiciones y características no requieran la dotación de un órgano de gestión propio”. La existencia de la red significa que sólo aquellos espacios o enclaves que la Consejería determine forman parte del sistema.

## La Zona Patrimonial de las Tierras de Antequera

Desde la perspectiva de sus características en relación con el territorio y su contenido patrimonial diacrónico, debemos considerar el espacio cultural que se articula en torno al Conjunto Arqueológico como una Zona Patrimonial definida por grandes unidades geográficas ritualizadas con monumentos funerarios, que en algunos casos, como señala Menéndez de Lurca en esta misma publicación, conforman emplazamientos que mantendrán el carácter funerario desde el megalitismo hasta el XIX.

La ocupación antrópica de este espacio se desarrolla sin solución de continuidad desde la Prehistoria, pasando por la Edad del Bronce, una potente romanización y un poblamiento medieval que llega hasta la actualidad a pesar de una cierta ruptura con la cristianización en el siglo XV. Este espacio ha sido





019. Vista panorámica. Recinto de los dólmenes, Antequera, sierra de El Torcal y cementerio / Imagen: Ikarum. Fuente: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

objeto de numerosas investigaciones centradas tanto en la necrópolis megalítica de Antequera como en El Torcal, que han venido acompañadas de prospecciones en la sierra de la Camorra, en el entorno del Conjunto, el estudio de emplazamientos de arte rupestre, la localización e investigación de la ciudad romana de Singilia Barba, o la más contundente, la realizada con ocasión del estudio de impacto ambiental del tramo IX de la línea AVE Córdoba-Málaga, que ha dado lugar a la identificación de un amplio número de localizaciones arqueológicas de todas las épocas, que se han incorporado al inventario municipal de yacimientos de Antequera. Este conocimiento diacrónico del territorio que se viene realizando desde hace tiempo ha respondido hasta ahora a puntuales intereses de investigación o actuaciones de tutela o arqueología preventiva sin que respondiese a una estrategia o planificación territorial. Sólo desde la creación del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera se ha comenzado a llevar a cabo una planificación de la investigación espacial. Y aunque el punto de partida lo constituye, como luego veremos, el Proyecto General de Investigación: *Sociedades, Territorio y Paisaje en la Prehistoria de Antequera*, está prevista una secuencia de estudios que abarquen otras etapas históricas completando así el mosaico diacrónico del territorio que, aunque aglutinado en torno al emblemático conjunto megalítico, servirá para establecer una estrategia global tanto de la protección como de la gestión de este espacio cultural.

Los trabajos planteados en el referido Proyecto General de Investigación entre 2007-2012 abarcan una comarca denominada Tierras de Antequera, situada en el corazón de las depresiones interiores andaluzas formando parte del surco intrabético. Según los investigadores del proyecto se trata de un paisaje abierto, bien delimitado por hitos de relieve muy característicos, capaz, ambiental y económicamente, de soportar contingentes humanos poderosos. En él, el núcleo megalítico Menga/Viera constituye el referente monumental por su situación respecto al territorio, y por la expresión de su arquitectura. El proyecto tiene como objetivo la interpretación de las dinámicas de ocupación humana del territo-

rio de Antequera y zonas colindantes durante la Prehistoria Reciente, pero con referencia a la ocupación del espacio en periodos históricos, al objeto de insertar y valorar la necrópolis megalítica de Antequera en su marco de poblamiento dentro de una amplia referencia temporal y geográfica.

El resultado del conocimiento actual determina que la potente presencia humana ha generado en dicho espacio un conjunto patrimonial, diverso y complementario, que está integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana de las Tierras de Antequera, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad, unido a importantísimos valores paisajísticos y ambientales. Es decir, que, aplicándole la definición de Zona Patrimonial, el espacio denominado Tierras de Antequera puede ser merecedor de esta categoría de protección. Asimismo, las características territoriales y de servicio público que el *Centro* pretende acometer en el futuro, lo convierte en un espacio que contiene elementos relevantes del patrimonio histórico, integrados en un marco físico de valor paisajístico y ecológico, que desarrolla la promoción y protección global en su conjunto, con especiales medidas o referencias a sus elementos más relevantes, como es el caso de la zona megalítica; las manifestaciones de arte rupestre o el de los restos de la ciudad romana de Singilia Barba, entre otros. Su objetivo puede ser el de propiciar “políticas integradas” a través de su Plan Director ya en marcha en estos momentos, convirtiéndose en un espacio singular de integración de los diversos tipos de patrimonio que en el mismo existen. Estas particularidades, son las propias de un Parque Cultural que es la figura de gestión que consideramos más conveniente en el futuro. En Andalucía, con la nueva ley de patrimonio, se debe plantear el diseño de cuales son las Zonas Patrimoniales que merezcan ser declarados Parques Culturales, y que deberán responder a comarcas o territorios de una gran importancia cultural, con un sistema patrimonial que posea un valor de uso y disfrute para la colectividad, unido a importantísimos valores paisajísticos y ambientales. Pocas comarcas como las Tierras de Antequera reúnen plenamente estos requisitos, haciéndola merecedora de ser uno de los Parques Culturales más característicos de Andalucía.